



OK wry

RESOLUCIÓN N° 3762

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

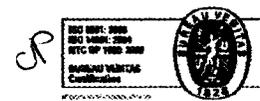
En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución No. 3074 del 26 de Mayo de 2011, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 109 del 16 de Marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de Mayo de 2009, el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, conforme a la ley 99 de 1993, Decreto 1594 de 1984 así como las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante queja telefónica radicada con número **013906 del 24 de julio de 1998**, la señora SORAYA ROMERO, denuncia ante el entonces Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA, hoy Secretaria Distrital de Ambiente –SDA, la tala indiscriminada de árboles sin autorización ubicados en la carrera 72 A No. 40 C – 66 sur entrada 3, localidad de Kennedy de esta Ciudad, presuntamente por la administradora del Conjunto.

Que en atención a la mencionada queja, se llevó a cabo visita por parte de la Subdirección de Calidad Ambiental Unidad de Seguimiento y Monitoreo del entonces Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, el día 04 de agosto de 1998, y de lo allí encontrado se dejó constancia con la emisión del Concepto Técnico No. **2776 de fecha 14 de septiembre de 1998** y número consecutivo DT 48, en el cual se determinó que en las zonas verdes del Conjunto se observó la poda drástica de un árbol de la especie Urapán, poda antitécnica de un Pino el cual presenta una inclinación de 45° y estado fitosanitario regular, así como siete (07) tocones de Ciprés de 0.20 m de altura, cuyo tiempo de tala es aproximado a 18 meses, según lo manifiesta la señora administradora, ubicados en espacio privado del Conjunto Residencial Timiza Célula I en la carrera 72 A No. 40 C – 66 sur, entrada 3, localidad de Kennedy de esta Ciudad, así mismo determina el concepto técnico lo incluido a la respectiva reposición por las talas consistente en 35 árboles de especies



all



3762

ornamentales sembradas en las zonas verdes del Conjunto y los árboles podados deberán ser cicatrizados y fertilizados para evitar infecciones y/o necrosis futuras.

Que mediante Aviso No. 0107 publicado en el Boletín Ambiental No. 4 en el mes de marzo de 1999, se informó la iniciación de la investigación.

Que mediante Auto No. **0047 de fecha 20 de abril de 1999**, la Subdirección Jurídica del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA, formuló cargos en contra de la señora SATURIA DE RUBIO, Administradora del Conjunto Residencial Timiza Célula I.

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente a la señora MARÍA SATURIA LONDOÑO DE RUBIO, identificada con cédula de ciudadanía número 41.348.426 de Bogotá, el día 09 de junio de 1999.

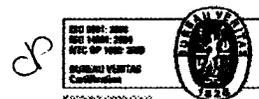
Que con Resolución No. **0400 de fecha 01 de marzo de 2000**, se declaró responsable al Conjunto Residencial Timiza Célula I, en cabeza de su administradora SATURIA DE RUBIO identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.348.426 de Bogotá, por la poda de tres (03) árboles de las especies Urapán (01) y dos (02) Pinos así como la tala de siete (07) árboles de la especie Ciprés, los cuales se encontraban ubicados en las zonas verdes de la Carrera 72 A No. 40 C – 66 sur de la localidad de Kennedy de esta ciudad, sin autorización de autoridad ambiental competente.

Que en el mismo Acto Administrativo, se impuso una sanción consistente en multa equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente, y se ordenó el pago por concepto de Compensación la entrega de treinta y cinco (35) árboles de especies nativas con altura mínima de 1.5 m en buen estado fitosanitario al Jardín Botánico José Celestino Mutis en el Vivero La Florida.

Que la mencionada Resolución, fue notificada en forma personal el 06 de marzo del 2000.

Que con radicado número **006093** de fecha 13 de marzo de 2000, la señora **SATURIA LONDOÑO DE RUBIO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.348.426 de Bogotá, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 0400 del 1° de marzo del 2000.

Que no se observa dentro del expediente Acto Administrativo que decidiera de fondo el recurso interpuesto.



200

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

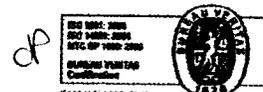
Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales, en especial las señaladas en el artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Constitución le asigna al Estado el imperativo de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos atribuyendo también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental en cuyo caso se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales y que consecuentemente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio" y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el



201



3762

tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que en relación con la actuación ambiental de carácter sancionatorio surtida dentro del expediente **DM 08-98-254**, en contra del **CONJUNTO RESIDENCIAL TIMIZA CÉLULA I**, en cabeza de su administradora señora SATURIA DE RUBIO, identificada con cédula de ciudadanía número 41.348.426 de Bogotá, esta Secretaría considera pertinente señalar lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, la cual establece en el artículo 64 que: *"Transición de procedimientos. El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."*

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: *"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."*

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H. Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: (...) *"Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se proroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previsto de manera general en la norma"* (...).

Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó: *"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor."* (...) Resaltado fuera del texto



DM



3762

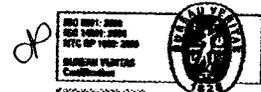
original.

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente: (...) *"Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa⁶ ..."* (Subrayado fuera de texto).

Que así las cosas y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y las instrucciones impartidas a través de la Directiva No. 007 de 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de 3 años contados a partir de la fecha en que la administración conoció los hechos que dieron origen a la presente actuación esto es, desde el **04 de agosto de 1998**, fecha en la cual esta entidad verificó los hechos a través de la visita técnica, para la expedición del acto administrativo de sanción, su notificación y debida ejecutoria, trámite que no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Que siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

En igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra *"Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos"* Primera edición 2004, expresó al respecto de la caducidad lo siguiente: (...) *"Ahora bien, en la*





P 3762

caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que está obligado a declararla sin necesidad de petición de parte" (...) Negrillas fuera de texto.

Que el mencionado acto administrativo no quedó en firme toda vez que no aparece dentro del expediente acto administrativo que resolviera o desatara el recurso interpuesto y de conformidad con los argumentos y análisis jurídicos, jurisprudenciales y doctrinales que anteceden, esta Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, considera pertinente declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del presente proceso, sin perjuicio de las demás actuaciones administrativas pertinentes y de las obligaciones que persistan respecto del administrado, con relación a lo actuado dentro del expediente **DM-08-98-254** diferentes a las consecuencias derivadas de la infracción de la normatividad Ambiental vigente en el Distrito Capital.

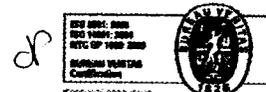
Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente -DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, por medio del cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Resolución No. 3074 del 26 de mayo de 2011, a través de la cual se delegan funciones al Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso iniciado por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, contenido en el expediente **DM 08-98-254** al **CONJUNTO RESIDENCIAL TIMIZA CÉLULA I**, en cabeza de su administradora señora **SATURIA DE RUBIO**, identificada con cédula de ciudadanía número 41.348.426 de Bogotá, por la poda de tres (03) árboles uno (01) de la especie Urapán y dos (02) de la especie Pino así como la tala de siete (07) árboles de la especie Ciprés ubicados en espacio privado de la Carrera 72 A No. 40 C - 66 sur, localidad de Kennedy de esta Ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.



all



3762

ARTÍCULO SEGUNDO Notificar la presente providencia al **CONJUNTO RESIDENCIAL TIMIZA CÉLULA I**, a través de su representante legal señora **MARIA SATURIA LONDOÑO DE RUBIO**, identificada con cédula de ciudadanía número 41.348.426 o quien haga sus veces, ubicado en la Calle 72 A No. 40 C - 66 sur, localidad de Kennedy de esta Ciudad.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO Enviar copia de la presente Resolución a la Subsecretaria General y de Control Disciplinario, así como a la Subdirección Financiera de esta Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para lo de su competencia.

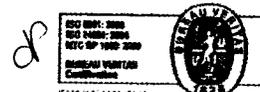
ARTÍCULO QUINTO Contra la presente providencia no procede recurso alguno conforme lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los **17 JUN 2011**

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Director de Control Ambiental

Proyectó Dr. Salvador Vega Toledo Abogado
1 Revisión Dra. Ruth Azucena Cortés Ramírez
2 Revisión Dra. Sandra Rocio Silva González Coordinadora
Aprobó Dra. Carmen Rocio González Cantero SFFS
Radicado N° 013906 del 24/07/1998
Expediente DM 08-96-254



copy



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

**EDICTO
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
HACE SABER**

Que dentro del expediente No 08-98-254 Se ha proferido el "RESOLUCIÓN No 3762 cuyo encabezamiento y parte resolutive dice: **POR LA CUAL SE DECALARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CONSIDERANDO

(...)

RESUELVE:

ANEXO RESOLUCIÓN

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los **17 de Junio de 2011.**

FIJACIÓN

Para notificar al señor(a) y/o Entidad **MARIA SATURIA LONDOÑO DE RUBIO**, Se fija el presente edicto en lugar visible de la entidad, hoy **VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2011**, siendo las 8:00 a.m., por el término de diez (10) días hábiles, en cumplimiento del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo y artículo 18 de la ley 1333 de 2009.

DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Secretaría Distrital de Ambiente

DESEFIJACION

Y se desfija el **03 NOV. 2011** de 2011 siendo las 5:30 p.m. vencido el término legal.

DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Secretaría Distrital de Ambiente

